

Enroque: Rojo x Rojo



Tiempo de lectura: 2 min.

[Jesús Elorza G.](#)

La reciente designación de Larry Devoe como Fiscal General de la República y de Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo, por parte de la Asamblea Nacional, no representa un avance hacia la democracia, sino la consolidación de un sistema de "enroques" rojo x rojo, diseñado para garantizar la supervivencia del régimen. Este proceso, lejos de cumplir con el espíritu de la Constitución, ha sido una puesta en escena para revestir de legalidad una decisión tomada en los despachos del Poder Ejecutivo.

La Ley Orgánica del Poder Ciudadano y la Constitución exigen para estos cargos una trayectoria técnica intachable y, sobre todo, autonomía e independencia política. Los perfiles designados contradicen estos principios:

Larry Devoe (Fiscal General): Su mérito no reside en la defensa de la justicia, sino en su rol histórico como escudo jurídico del régimen ante organismos internacionales. Su vinculación directa con el Ejecutivo lo inhabilita moral y legalmente para ejercer una acción penal autónoma, especialmente en casos de violación de derechos humanos donde él mismo actuó como defensor de los presuntos victimarios.

Eglée González Lobato (Defensora del Pueblo): Su designación es el resultado de una maniobra de distracción política. Su perfil, aunque presentado bajo un barniz de academia y moderación, carece de la independencia necesaria para enfrentar al Estado en defensa de los ciudadanos. Notorios son sus acercamientos con el régimen en la defensa de los fraudulentos resultados de la elección presidencial el 28 de julio 2024.

Es imperativo denunciar el papel colaboracionista de sectores que, bajo el nombre de "oposición", sirvieron de fachada para legitimar esta farsa.

Fuerza Vecinal y el factor Antonio Ecarri: Actuaron como el "comodín" necesario para simular una pluralidad inexistente. Al proponer y respaldar nombres que terminaron favoreciendo la agenda del régimen, estas organizaciones se convirtieron en la mampara política que permitió proyectar una falsa imagen de consenso y diálogo ante la comunidad internacional. Su participación no fue un ejercicio de política real, sino un servicio de gestoría para el mantenimiento del statu quo.

Como han denunciado organizaciones como Transparencia Venezuela y Justicia, Encuentro y Perdón, el proceso careció de:

- Transparencia: Evaluaciones realizadas en secreto, sin mecanismos de escrutinio público.
- Participación Ciudadana: Se ignoraron las objeciones de la sociedad civil sobre la falta de idoneidad de los postulados.
- Trayectoria Técnica: Se privilegió la lealtad política sobre el conocimiento jurídico y el compromiso con los derechos humanos.

Este nombramiento anula cualquier esperanza de justicia interna tras los eventos electorales y las sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales. Al colocar a un "defensor del gobierno" como Fiscal y a una figura pactada como Defensora, el Estado venezolano envía un mensaje claro: la impunidad es política de Estado.

El país no asiste a una renovación de poderes, sino a un perfeccionamiento de la hegemonía. El tiempo de las "mesas de diálogo" y las "reformas estructurales" cosméticas se ha agotado. Desde esta tribuna, desconocemos la legitimidad de funcionarios cuya única credencial es la complicidad con el sistema que hundió a Venezuela en su peor crisis institucional.

La justicia no es un enroque de nombres; es un derecho del pueblo que hoy sigue siendo secuestrado.

[ver PDF](#)

[Copied to clipboard](#)